

Capítulo III

Los rostros de los barrios populares

Paula Ramírez y Candela Reinares



▲ Barrio Bicentenario, La Matanza, provincia de Buenos Aires

El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) es el resultado de un arduo trabajo de vecinos y vecinas que se involucraron en el proceso, algunos de manera momentánea, otros de manera persistente y permanente. Miles de personas anónimas formaron y forman parte del proceso. Muchas veces, las historias de vida, anécdotas, dramas y alegrías de los hombres y mujeres de las clases populares quedan invisibilizadas, ya que suelen participar en hechos políticos de manera masiva.

En esta ocasión, queremos reducir la escala de observación, como si usáramos un microscopio, para conocer cómo vivieron el relevamiento algunas de las personas que participaron. Nos proponemos aportar a la historia general del primer relevamiento, pero partiendo de la experiencia de seis compañeros y compañeras de distintas partes del país. Conocer, a través de la palabra de quienes fueron protagonistas, cómo se desarrolló el relevamiento en los barrios, cómo impactó en la historia de cada uno de estos y cómo fue apropiado por sus habitantes.

El relevamiento se insertó y adaptó según los contextos locales, incorporándose como un capítulo más en la larga historia de los barrios populares. En las seis experiencias, referidas a continuación, encontraremos relatos de resistencia y organización popular, que enfrentan las injusticias cotidianas y construyen un futuro mejor.

La organización barrial. Región Gran Buenos Aires: Barrio La Cava, San Isidro

La Cava es uno de los barrios más populosos y antiguos del país. Está ubicado en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y viven alrededor de 2.300 familias que no tienen acceso a la electricidad

ni a cloacas. El barrio nació en 1950 y desde sus comienzos, los vecinos y vecinas armaron espacios comunitarios para abordar distintas problemáticas. Fernanda Miño nació, se crió y comenzó su militancia social como catequista en La Cava. En 2010 abrió Enbarriarte, un espacio que tenía como principal objetivo ser lugar de encuentro para las niñeces. En 2016 empezó como coordinadora barrial del Renabap y en 2017 fue elegida como concejala de San Isidro. Actualmente, se desempeña como secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Si hubiera que contar toda la historia del barrio, según Fernanda, podríamos armar un libro solo para eso, ya que existe una larga trayectoria de lucha y organización, con decenas de proyectos populares armados al calor de instancias colectivas. Ella cuenta que, cuando se creó el barrio, las casas eran grandes y con patios, pero con el tiempo esto cambió porque las familias fueron creciendo sin posibilidades económicas de acceder al suelo urbano.

Las nuevas generaciones fueron construyendo sus hogares en los mismos terrenos y con el tiempo fue aumentando el hacinamiento. De esta forma, se fueron reduciendo los espacios domésticos, incluso aquellos destinados al juego de los niños y las niñas. Ante la falta de espacios públicos adecuados, los pasillos del barrio cumplieron ese rol.

En la historia de este barrio, Fernanda también destaca el desarrollo de la organización popular: desde las comisiones de las viviendas sociales en los noventa, el trueque y las ollas populares en los 2000, hasta el surgimiento de espacios comunitarios y reivindicativos en las últimas dos décadas. Entre esos espacios surgió Enbarriarte, cuyo espacio físico era el patio de la casa de Fernanda.

Primero funcionaba como un espacio recreativo donde se realizaban actividades lúdicas para los más chicos. Rápidamente, la misma necesidad de los pibes hizo que se comenzaran a dar talleres de apoyo escolar y a acompañar trayectorias educativas. El espacio fue creciendo y no solo se sostenía la cotidianidad, sino que se convirtió en un espacio educativo más para el barrio. Para Fernanda: “Eso era el aporte que podíamos hacer como familia, no solo el reclamo de lo que faltaba, sino que todo lo que podíamos hacer con nuestras manos lo hacíamos”.¹

Desde su surgimiento, Enbarriarte formó parte de Cava en Red. Un espacio de encuentro de todas las organizaciones de base que lle-

¹ Entrevista a Fernanda Miño, 2022.

vaban adelante actividades dentro del barrio. Posteriormente, el grupo promotor de ese espacio logró trascender las fronteras y conformar Barrios en Red, con referentes de otros barrios populares del distrito. Desde allí se organizaban actividades para visibilizar el reclamo por la urbanización y demandar respuestas a la falta de acceso a derechos que sufren las familias que habitan en esos territorios.

Fernanda cuenta que la inundación que sufrieron en 2013 profundizó sus reclamos:

San Isidro lo que menos tiene es el reclamo en la calle, entonces, nosotros lo hacíamos e íbamos al Municipio para que vieran que estábamos organizados, que estábamos trabajando y éramos conscientes de que eran ellos los que tenían que solucionar esas problemáticas en los barrios populares.

Los años siguientes, las iniciativas no pararon. Cada vez eran más los compañeros y compañeras que se sumaban a pelear para conseguir mejores condiciones de vida.

En estos espacios organizativos, Fernanda conoció personas de diversas organizaciones sociales. Algunos de ellos, militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, se acercaron a ella en el 2016 para proponerle que Enbarriarte se sumara al relevamiento de barrios populares. Fernanda menciona que al principio le dieron dudas debido al contexto político; resultaba extraño en un gobierno que no tenía en agenda las necesidades de los sectores populares, una política que apuntaba a registrar las condiciones en las que vivían los más pobres. Sin embargo, se convenció cuando supo de las organizaciones que estaban detrás del relevamiento. Todos los movimientos sociales que habían reclamado por la Ley de Emergencia Social eran quienes estaban a cargo del programa y de llevarlo adelante. Finalmente, Fernanda decidió ponerse al hombro la tarea en La Cava.

Lo primero que hicieron desde Enbarriarte fue convocar a quince personas más para que participaran como relevadores y relevadoras: “La convocatoria fue como en otros casos, porque ya teníamos el hábito de la red, de organizar o convocar para los talleres, estábamos habituados a llamarnos”. Hacia agosto de 2016 empezaron a relevar y en tres meses lograron censar al 80% del barrio.

Las personas convocadas tenían experiencia previa en la militancia social, por lo que rápidamente se organizaron. La mayoría eran refe-

rentes y los vecinos y vecinas los conocían ya que coordinaban espacios comunitarios o eran catequistas de la parroquia de La Cava. Estas condiciones permitieron que las familias relevadas confiaran en quienes los estaban encuestando y les abrieran las puertas de sus hogares.

Según Fernanda, para los relevadores y las relevadoras los recorridos se convirtieron en reencuentros con viejas amistades y fructíferas charlas:

A muchos se nos hizo fácil, porque éramos militantes de muchos años y todas las familias nos conocían; entonces, les contábamos que recogíamos esos datos para ver cuántos barrios populares hay en Argentina y empezar a pelear por lo que falta.

Mientras que el relevamiento iba avanzando a paso firme, los relevadores y relevadoras seguían trabajando en sus espacios comunitarios, abordando las problemáticas urgentes de su barrio. En esos meses, la violencia y la desidia se empezaban a profundizar. Para diciembre de 2016 habían sido asesinados quince jóvenes, producto de la circulación de armas y drogas en el barrio. La gota que rebalsó el vaso fue el asesinato de una mujer, madre de cuatro niños, que estaba conversando con sus amigas en la puerta de su casa el 24 de diciembre.

Entre las fiestas y en medio del trabajo del relevamiento, las organizaciones convocaron a una marcha del silencio para exigir respuestas a la ola de violencia. Para Fernanda, las marchas buscaban desnaturalizar esa situación:

En los barrios donde todos estamos pegaditos, hacinados, todo es intenso, desde los momentos de alegría hasta los momentos de tristeza, de violencia. Uno trata de que los chicos no lleguen a ciertas situaciones, pero hay familias que están muy deshechas y las tentaciones están a la orden del día, son por quienes luchamos todos los días desde la organización social, desde un movimiento, desde una cooperativa.

El relevamiento se fue haciendo al ritmo de la cotidianidad del territorio. Según Fernanda, los resultados de las encuestas en La Cava confirmaron lo que ellos y ellas ya sospechaban sobre el hacinamiento en el barrio, en cada casa convivían más de una familia y varias generaciones.

El trabajo nunca cesó y quienes formaban parte del grupo promotor de relevamiento en La Cava empezaron a participar en barrios don-

de hacían falta más manos. Las visitas a otros barrios permitían conocer la realidad de otros territorios, con sus similitudes y diferencias, y propiciaban que otras familias pudieran apropiarse de la herramienta que los movimientos sociales habían conquistado con mucho esfuerzo.

En diciembre de 2017, Fernanda asume como concejala de San Isidro. Desde allí, y con la visibilidad que le permitió el cargo legislativo, logró impulsar discusiones a nivel local sobre la situación de habitamiento por la cual pasaban las familias que viven en los barrios. Al año siguiente, junto con referentes barriales de todo el país, fundaron la Mesa Nacional de Barrios Populares.

Desde allí, pudieron amplificar la voz de los barrios hacia el Congreso nacional. Tal como cuenta Fernanda:

El trabajo que realizamos en la mesa iba más allá de lo que yo podía hacer como concejala. Veníamos discutiendo la Ley N° 27453 y desde ahí teníamos injerencia, y eso incomodaba un poco a la política local. Terminaron viendo que no éramos solamente las villeras que reclamaban. Habíamos construido herramientas para cambiar no solamente mi barrio, sino todos los barrios de Argentina.

Tendiendo puentes. Región Patagonia: Barrio Obrero, Cipolletti, Río Negro

En 2009, alrededor de setenta familias realizaron una toma de tierras aledañas a la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y decidieron nombrarse Barrio Obrero. El nombre daba cuenta de su composición social: cosechadores de manzana, productores avícolas y de la construcción. Rápidamente, fueron llegando al barrio cada vez más familias que buscaban un lugar donde vivir, un suelo donde construir su casa. Actualmente, según el Renabap, este barrio está conformado por más de mil familias.

Lila Calderón es la referente del Barrio Obrero, que se convirtió en un ícono por la lucha de la tierra y la vivienda. Los vecinos y vecinas, organizados en espacios asamblearios, han participado activamente en redes locales, nacionales e internacionales que les permitieron ir conquistando derechos. Desde el inicio de la toma, Lila Calderón fue impulsora del Foro por la Tierra y Vivienda de Río Negro y, actualmente, forma parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

La organización interna estuvo presente desde el inicio del barrio. La Asamblea Vecinal, con un delegado por manzana, discutió y votó reglas propias de convivencia y formas de abordar determinadas problemáticas. Se decidió que el barrio sería implacable con quienes vendían drogas, que no se toleraría la violencia de género y que se ofrecerían espacios de contención para niños, niñas o adolescentes con consumos problemáticos. Así, fueron inaugurando centros comunitarios, como un jardín, merenderos, un centro de consumos problemáticos, un bachillerato popular, un ropero comunitario y un centro de usos múltiples que se está terminando de construir.

Durante los primeros años de la toma de Barrio Obrero, la justicia ordenó el desalojo en tres oportunidades e inició cien causas contra la toma, incluso impidió que Lila se acercara a la Municipalidad de Cipolletti. Según Lila, esta discriminación y persecución que viven los barrios populares de la zona se debe a que en Río Negro el valor del suelo es muy alto, por lo que se priorizan los negocios inmobiliarios antes que el derecho a la vivienda digna:

Vivimos en una zona petrolera y si vos tomas o peleas por un lugar, te metes con el gran negocio. Cuestionan los asentamientos, pero no cuestionan a Lewis que tiene hectáreas y hectáreas de forma irregular... Entonces, ¿cuál es el criterio? La plata y el poder.²

El barrio resistió y luchó por la regularización. Desde entonces, la seguridad en la tenencia fue una de las principales reivindicaciones por las que lucharon Lila y sus compañeros. Según Lila, el temor al desalojo era una sensación persistente y compartida por los habitantes de los barrios populares:

La sufrimos un montón, me tocó recorrer lugares del país con orden de desalojo y sentías su dolor, por miedo a que vinieran y los sacaran como sacaron a la gente de Buenos Aires. El miedo al desalojo creo que es algo que tenemos todos.

Finalmente, luego de muchos reclamos y movilizaciones, los vecinos y vecinas de Barrio Obrero lograron frenar el desalojo y el hostigamiento de las autoridades. Eso fortaleció la referencia del barrio y la noticia

² Entrevista a Lila Calderón, 2022.

se esparció por la localidad. El triunfo provocó que otras organizaciones comunitarias recurrieran a los delegados y las delegadas del Barrio Obrero para ser acompañados en procesos que estaban llevando adelante. Entre algunos de esos pedidos, llegó un grupo de familias buscando un lugar para vivir, Lila acompañó la toma de las tierras linderas y crearon el Barrio Obrero B.

Otro de los problemas principales fue la falta de acceso formal a los servicios, que ha tenido consecuencias trágicas para Barrio Obrero. En 2014, sufrieron una de las peores inundaciones y tuvieron que ser evacuadas 400 personas y en 2020 el incendio de una casilla provocó la muerte de dos niñas y su padre. Los vecinos y vecinas se movilizaron frente a la tragedia denunciando que podría haberse evitado si hubiesen contado con los servicios básicos.

Frente a este contexto tan difícil, los vecinos y vecinas de Barrio Obrero construyeron redes con otros barrios y organizaciones para fortalecer sus capacidades. Entre estos espacios, formaron parte del Foro por la Tierra y la Vivienda de Río Negro, creado en 2010. Según Lila: “Desde el foro acompañamos los procesos de nuevos asentamientos y, en el marco de la situación de desalojos, nos unimos para pelear por la regularización. El foro es una herramienta que nos sirve”.

Ante la falta de políticas y la represión estatal, el foro se convirtió en un espacio donde discutir las necesidades de los barrios y reclamar que el Estado tomara las medidas necesarias. En ese contexto, en 2016, desde el foro se impulsó el relevamiento de barrios populares, garantizando el registro de los primeros 46 asentamientos de la provincia. Las experiencias que tuvieron cuando comenzaron a recorrer las calles fueron múltiples: “En general hubo mucha predisposición, pero otros tenían desconfianza. Nos han jodido tantas veces, que vos ves gente con carpeta y ya te asusta. Entonces, daba un poco de miedo no saber, pero nosotros nos sentábamos y explicábamos”, cuenta Lila.

El relevamiento avanzó rápido, pero solo era el primer paso del proyecto. Los años siguientes fueron de mucho trabajo en territorio, hasta que tocó pelear por la ley de barrios populares. Barrio Obrero fue parte de la fundación de la Mesa Nacional de Barrios Populares, sobre su participación, Lila afirma:

Es un orgullo decir que fuimos las que impulsamos la ley. En el momento de la aprobación me sentí orgullosa de mis compañeras, de la gente que le puso el cuerpo. Lloré, lloré un montón, porque era algo

que estábamos esperando, era algo soñado para nosotros. Ver que nos daban cuatro años finalmente contra los desalojos. Para mí es un orgullo decir que fuimos parte de la Mesa, somos compañeras que, desde que nos conocimos, venimos peleando para que los derechos se vayan haciendo reales.

La visibilización como estrategia defensiva. Región Pampeana: Córdoba

Los habitantes de los barrios populares cordobeses distan mucho de la clase obrera industrial que caracterizó a la provincia décadas atrás. Según el Renabap, el 33% de los trabajadores de los barrios populares de Córdoba se encuentran en negro, el 30% realiza trabajos en el hogar sin sueldo y el 18,61% trabaja de manera independiente o en cooperativas familiares. Noelia Feldman, integrante del Encuentro de Organizaciones y coordinadora regional del relevamiento, cuenta que el cambio de época también se vio reflejado en el territorio, cuando a comienzos del siglo XXI se impulsaron políticas de relocalización de barrios obreros históricos para despejar zonas estratégicas de la capital.

“Antes, en el microcentro cordobés, había un volumen muy grande de barrios populares, pero la revalorización de estas zonas produjo la expulsión y una dinámica de persecución muy concreta contra los sectores populares”, explica Noelia.³ Por esta razón, actualmente, los barrios populares de Córdoba capital se concentran en las zonas cercanas a la circunvalación y, como sucede en el resto del país, además de la falta de acceso a los servicios básicos, están en zonas ambientalmente deterioradas. Muchos de estos barrios cordobeses se encuentran sobre exbasurales o son aledaños a ríos contaminados por la actividad industrial y agropecuaria.

A la expulsión y la carencia, se le sumó una escalada represiva de la mano de un ambiguo Código de Faltas Municipal, que daba vía libre al mal llamado “olfato policial”, dirigido, especialmente, contra los jóvenes de los sectores populares y manifestantes de diversas causas sociales. La relocalización como única política de vivienda implicó violentos operativos de desalojo cuando las familias no aceptaban abandonar sus casas. El 2007 es un año importante, ya que los secto-

³ Entrevista a Noelia Feldman, 2022.

res perjudicados se organizaron para hacer frente a las políticas represivas de manera colectiva.

Desde entonces, se realiza cada año la Marcha de la Gorra, encabezada por organizaciones juveniles para denunciar el abuso de las fuerzas de seguridad, y que, en los últimos años, se ha replicado en distintas ciudades del país. También en 2007 nació el Encuentro de Organizaciones, con el objetivo de fortalecer el entramado social, que reunía cooperativas de trabajo, bibliotecas populares, comedores, espacios comunitarios y organizaciones de los barrios populares.

A pesar de estas importantes instancias de organización y denuncia, en el 2013 volvió a producirse una violenta reacción institucional frente a una toma de tierras en el Barrio Comechingones, que consistió en masivas detenciones de personas que habían participado de la toma y otras que solo se habían movilizado en apoyo. Según Noelia, ese hecho “fue icónico por la escalada represiva que se estaba viviendo. Construimos herramientas de autodefensa y seguridad territorial, a través de los lazos territoriales, y empezamos a visibilizar lo que estaba ocurriendo”. Años después, el Barrio Comechingones se consolidó y hoy viven cuarenta familias que están incluidas en el Renabap; sin embargo, en aquel momento, la persecución a sus habitantes y a los militantes sociales profundizó la desconfianza de estos sectores hacia las instituciones provinciales.

En 2016, las organizaciones vinculadas a esas redes de autodefensa barriales comenzaron a debatir la posibilidad de sumarse al Relevamiento Nacional de Barrios Populares para realizarlo en Córdoba. En un contexto de alta conflictividad, el proyecto generó expectativas, pero también muchas dudas, fundamentalmente porque implicaba la recolección de datos personales de los vecinos y vecinas de los barrios populares, que todavía no contaban con un paraguas legal que legitimara su situación habitacional. Noelia cuenta que la discusión fue difícil, pero finalmente se votó por avanzar: “Decidimos apostar a la visibilización como una estrategia defensiva, no era solo para nosotros, sino una visibilización a gran escala, de más de los 4.000 barrios populares del país”. Bajo la premisa de construir una herramienta defensiva para los barrios populares, comenzó el relevamiento en Córdoba. Se logró recorrer 194 barrios de la mano de cientos de referentes barriales que impulsaron el proyecto. Noelia cuenta que, en el proceso, muchas personas dejaron atrás años de esconderse para evitar la criminalización y fueron empoderándose y apropiándose del relevamiento:

Si en tu vida nadie te apostó ni medio peso a que podías hacer algo, y de pronto tenés tu pechera, tu mapa, los folletos y recorres tu barrio y tantos otros, te levanta la mirada... de pronto terminaban haciendo diagnósticos, iban generando sus propias herramientas para sumarle calidad a lo que estaban haciendo. Había dos compañeros, con muchos problemas de salud, que empezaron retímidos y terminaron dinamizando asambleas en una toma para explicar de qué se trataba, con una claridad total, desde la claridad de vivir en un barrio popular.

Una vez que salió el Decreto N° 358/17, que creaba el certificado de vivienda familiar, y luego la Ley N° 27.453, que prohibía los desalojos, comenzó a concretarse el proyecto: “Imaginate que no te echaran... se generó una expectativa de que la tierra es para quien la habita, estábamos construyendo esta herramienta al calor de la olla y pertenecía a los sectores populares”, afirma Noelia.

Sin embargo, contar con recursos legales no siempre se tradujo en triunfos contundentes y quienes impulsaban el proyecto eran conscientes de que iban a tener que seguir peleando para conquistar sus derechos:

Sabíamos los límites del Estado. Tener la herramienta no significó que los poderes judiciales y económicos dejaran de querer avanzar sobre los sectores populares. Pero pudimos generar antecedentes superinteresantes en Córdoba en relación con la ley y la defensa de los territorios.

Entre los antecedentes que se pudieron lograr, Noelia destaca los casos de los barrios populares Parque las Rosas y Cuesta Blanca, que fueron expropiados y hoy cuentan con proyectos de integración sociourbana en marcha.

Las comisiones vecinales. Región Cuyo: San Juan

En San Juan hay 42 barrios populares y se estima que allí viven alrededor de 58.480 personas. Se trata de una provincia con un clima árido y de altas temperaturas, por lo que la falta de servicios básicos dificulta aún más el día a día. Pablo Carricondo, referente del Movimiento Evita y coordinador del Renabap en San Juan, afirma que fue un desafío que

implicó una doble función, por un lado, como militantes recorriendo los barrios y, por otro, como representantes del proyecto frente a los municipios y a las prestatarias de servicios básicos.

La política de vivienda en San Juan se basó en la erradicación de barrios populares de zonas céntricas y su relocalización en las afueras de las ciudades, con la construcción de vivienda social. Por ese motivo, la capital sanjuanina cuenta solo con un barrio popular, mientras que la mayoría de estos se encuentran en localidades aledañas. Según Pablo, esta política se desarrolló más por cuestiones “estéticas” que por hacer frente a la necesidad de tierra y vivienda:

Era como si tuviéramos que descomprimir la capital porque al gobierno no le gustaba ver casas con nailon, caña y paja. No importaba si esas personas laburaban al lado de su barrio, la política era pasar la topadora y dar casas más lejos.⁴

Sin embargo, frente a la ausencia de una política de acceso al suelo, los barrios populares no dejaron de aparecer en las localidades cercanas a la capital provincial. Pablo cuenta que estos barrios no nacieron como tomas organizadas, sino que fueron consolidándose de a poco mientras que cada familia iba instalándose en terrenos disponibles.

Las características climáticas de la provincia hacen que la vida de los vecinos y vecinas de los barrios populares sea muy dificultosa. San Juan se caracteriza por una gran amplitud térmica, altas temperaturas en el verano, vientos zonda y bajas precipitaciones. A ello, se suma que es una zona propensa a sufrir terremotos, en enero de 2021 se produjo un sismo de 6.4 grados que destruyó muchas de las viviendas de adobe y paja, clásicas construcciones en los barrios populares sanjuaninos.

La provincia cuenta con un Código Edilicio que apuesta a las construcciones sismorresistentes; sin embargo, son construcciones costosas. En los barrios populares, ante la falta de apoyo estatal, las familias que no pueden soportar esos costos, continúan haciendo sus casas con técnicas tradicionales, con material económico a pesar de ser poco resistente frente a los sismos.

Cuando comenzó a gestarse el relevamiento de barrios populares, las organizaciones sanjuaninas fueron convocadas para realizarlo en su territorio. En agosto del 2016, se realizaron las primeras reunio-

⁴ Entrevista a Pablo Carricondo, 2022.

nes con los coordinadores nacionales del Renabap, que viajaban por las provincias para formar los equipos regionales. Posteriormente, las organizaciones se distribuyeron las zonas, según sus construcciones territoriales previas. Luego, se capacitaron a los relevadores y relevadoras, y, finalmente, comenzó el relevamiento.

A pesar de las situaciones de vida adversa de las familias de los barrios populares de San Juan, los relevadores y relevadoras fueron bien recibidos:

Hacía como 40 grados de calor, pero la idiosincrasia de los vecinos era de amabilidad. Te veían con pechera y te invitaban a pasar a su casa, a sentarte en su comedor, te invitaban un vaso de jugo fresco, con hielo de botella que tenían en conservadoras de telgopor, y terminábamos almorzando en las casas de las compañeras a las que relevábamos.

Al momento de este primer relevamiento, todavía no existía el Decreto N° 358 ni la ley de barrios populares, por lo que hubiera sido arriesgado contarles a las personas encuestadas que se estaba proyectando una expropiación masiva. Frente a ello, Pablo explica:

Al principio trabajamos mucho con el mensaje de la Asignación Universal por Hijo, buscando a quienes todavía no la cobraban y encuestando para el Renabap. Esas familias no existían ni para el espectro de la política y, menos, para las gestiones institucionales de los distintos organismos.

Tan solo la presencia del relevamiento en los barrios y la realización de las encuestas generaron una conmoción en la provincia y se logró poner en agenda la problemática que vivían estas familias. Cuando se publicó el Decreto N° 358/17 los vecinos y vecinas fueron consiguiendo su certificado de vivienda familiar, pero las empresas prestatarias de servicios básicos o los municipios no respondían positivamente a su responsabilidad.

Para reclamar sus derechos, los barrios armaron mesas de trabajo compuestas por la Comisión Vecinal, las organizaciones sociales y los coordinadores provinciales del Renabap, con el objetivo de motorizar los pedidos de regularización y extensión de los servicios básicos. En ese momento, comenzó un derrotero entre las oficinas municipales y las empresas de servicios. Según Pablo:

Los funcionarios nos decían que no estaban autorizados a entrar en los terrenos, pero sí estaban autorizados por el decreto. Nosotros les decíamos que eran vecinos que pagaban los impuestos igual que el resto, que tenían los mismos derechos que todos y que si no hacían nada, los barrios se iban a movilizar para exigirlo.

Frente a esta negativa, se enviaron notificaciones a los municipios para que acusaran recibo del Decreto N° 358 y se cumpliera. Pablo cuenta que a esa altura, la situación comenzó a cambiar:

Íbamos con una carpeta... le decíamos la carpetita mágica, porque contenía el decreto, una nota formal firmada por la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la notificación enviada por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cuando el diálogo comenzó a mejorar, los funcionarios se sumaron a las mesas de trabajo barriales y comenzaron a coordinar los esfuerzos hacia la integración sociourbana. En estos años, se ha logrado que muchos barrios constituyan su personería jurídica, apostando a la organización vecinal para ser los protagonistas del proceso.

Hacia la conquista de servicios básicos. Región NEA: Misiones

Misiones es la provincia con mayor cantidad de personas viviendo en barrios populares de la región del nordeste argentino y la cuarta en todo el país. Según el Renabap, existen 374 barrios populares y 111 de ellos se encuentran en la región metropolitana, que comprende las localidades de Posadas, Garupá y Candelaria. Horacio Errubidarte es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Misiones, coordinó el relevamiento en la región y cuenta que la problemática de la vivienda se profundizó en la época neoliberal, cuando cambiaron las políticas habitacionales y creció la pobreza.

En la década de 1990, la tecnificación de la industria forestal y trefera provocó cambios en la economía de las familias misioneras, afectando principalmente a las clases populares: “Antes tenías cuadrillas de motosierristas, gente que limpiaba al monte, gente que marcaba el monte. En mi zona, quedaron en la calle 4.000 motosierristas, jefes

de familia que se quedaron no solo sin trabajo, sino sin oficio”, relata Horacio.⁵ Al mismo tiempo, se produjo un retorno de migrantes desde el conurbano bonaerense que habían viajado en otra época en búsqueda de oportunidades económicas. Según Horacio:

Misiones es más amigable para el pobre, acá hay mucha tierra todavía en disputa, las localidades tienen muchos terrenos y las familias pueden cultivar en sus patios, se puede tener comida y criar animales. Hay ciertas soluciones que quizás en los grandes centros urbanos no dieron resultado y muchas personas volvieron.

Los barrios populares misioneros se multiplicaron al calor del neoliberalismo y sus habitantes se reconvirtieron en trabajadores golondrinas o del aserradero, vendedores ambulantes, ladrilleros, chacreros, cooperativistas o *paseros* (trabajadores de la frontera que comercializan con productos de Paraguay). En estos años, se conformaron comisiones barriales para detener desalojos y reclamar por el acceso a los servicios básicos.

La falta de agua potable en los barrios populares es un problema urgente. En Misiones hay 89 barrios que acceden al agua a través de pozos comunitarios o domiciliarios o a través de vertientes cercanas. Ello representa el 9% del total de los barrios populares del país en esta situación. “El agua es el gran problema, porque las temperaturas acá no son muy amigables si no tenés acceso formal”, afirma Horacio. Según el Renabap, para el 2016 solo cinco barrios contaban con conexión formal al agua corriente de red pública, solo uno tenía conexión formal a la red cloacal y solo 63 contaban con conexión formal a la red pública de energía eléctrica con medidores domiciliarios.

Horacio cuenta que los movimientos sociales venían acompañando los reclamos de tierra y techo de los trabajadores rurales. En su mayoría, eran chacareros que habían tomado tierras y construido barrios populares: “Si bien ya existían, se produjo una explosión de la organización en Misiones entre 2015 y a principios de la gestión de Macri, para trabajar problemáticas en concreto”. Con la experiencia de los años anteriores y la ebullición reciente, en 2016 las organizaciones pusieron en marcha los planes para realizar el relevamiento: “Había desconfianza hacia el gobierno e incertidumbre, pero sobre todo mucha esperanza y convencimiento de que había que hacerlo”.

⁵ Entrevista a Horacio Errubidarte, 2022.

Los primeros preparativos fueron las capacitaciones para relevadores y relevadoras, que se realizaban en los centros comunitarios de los barrios. Esta instancia contaba con una gran participación, los coordinadores del relevamiento recorrían merenderos, comedores y espacios de las organizaciones, donde llegaron a participar más de cincuenta personas. El primer desafío fue la apropiación de la tecnología debido a la gran diversidad de los grupos: “Había gente muy grande a la que le costaba entender la aplicación y los celulares, pero después veías que había pibes que le agarraron la mano y ayudaban a los otros y le trataban de explicar a sus compañeros”.

A su vez, en la capacitación se buscaba transmitir el espíritu del proyecto: “Había entusiasmo una vez que se entendía de qué se trataba, íbamos salir a los barrios con pecheras y eso era muy visible y novedoso, había un espíritu de compañerismo y de crear estrategias para que saliera mejor”, relata Horacio.

A medida que iban realizando las encuestas, los relevadores y relevadoras se encontraron con mucha recepción, pero también con el abandono del Estado: “La gente demandaba cosas por fuera del relevamiento, desde turnos en el hospital hasta la atención de situaciones de personas con discapacidades. Había mucha gente indocumentada o que no cobraban la AUH. Había situaciones de mucha vulnerabilidad y nos pedían respuesta, fue un desafío”.

Además de esto, en algunos casos, el relevamiento se topó con los intereses de intendentes o poderes locales. Tal como lo cuenta Horacio: “No es fácil que un referente del Ejecutivo municipal te esté queriendo echar constantemente, no gustaba, pero seguíamos haciendo. Nosotros hablábamos mucho con los vecinos, eso fue clave, no éramos un grupo que entraba y salía del barrio”.

A contracorriente de lo que sucedió en la mayor parte del país, en Misiones, el certificado de vivienda familiar se extendió rápidamente debido a casos exitosos de reclamo de servicios. Horacio explica que las dos grandes prestatarias de luz y agua aceptaron el certificado en la zona metropolitana y, si bien fue muy dificultoso en otras localidades, sirvió para generar antecedentes:

Hubo casos exitosos siempre que hubo continuidad en el pedido, cuando hubo organización y lucha. Hoy en Iguazú todo el mundo te pide certificado para bajar la luz, pueden porque los vecinos hicieron el quilombo necesario para que te lo acepten.

Para ello, fue importante la organización de las comisiones barriales, que rápidamente se apropiaron del certificado de vivienda familiar como una herramienta para solicitar acceso a los servicios y enfrentar situaciones de desalojos. Ese fue el caso del Barrio Chacra 238, donde, en el 2019, treinta familias resistieron un desalojo con el acompañamiento de las organizaciones y no solo lograron detenerlo, sino que finalmente se logró la expropiación de esos terrenos.

El Renabap frente a los poderes locales. Región NOA: Barrio 18 de Marzo, Salvador Mazza, Salta

La historia reciente de la provincia de Salta está marcada por haber sido una de las cunas del movimiento piquetero argentino, con los estallidos de 1997 en Tartagal y General Enrique Mosconi. En la actualidad, de un total de 233 barrios populares salteños, el 22% se ubican en estas dos localidades. En 2018, Matías Mora, facilitador del Renabap y militante del Movimiento Evita, estaba en la localidad de Salvador Mazza realizando operativos de entrega de certificados de vivienda familiar, pero terminó detenido por querer frenar un desalojo en el Barrio 18 de Marzo, de Salvador Mazza.

Durante la década de los noventa, la desestructuración del trabajo formal generó un caldo de cultivo para nuevas formas de lucha y el barrio apareció como un lugar central de organización de miles de desocupados y sus familias, donde las mujeres jugaron un rol importante por los lazos sociales que construían en el trato cotidiano. Un dato interesante que otorga la Encuesta Permanente de Hogares, realizada por el Indec, es que hacia 2004 Salta era la provincia con mayor porcentaje de mujeres jefas de hogar y en la actualidad supera el promedio nacional. Los desocupados y las desocupadas, que protagonizaron el estallido de 1997, organizaron famosos piquetes en rutas nacionales y los petitorios que entregaban a las autoridades contenían demandas de viviendas económicas en los barrios humildes y otorgamiento de tierras para los pueblos originarios.

Las demandas de tierra y techo atravesaron la realidad de las organizaciones sociales salteñas. La respuesta general fue la violencia institucional. Para el relevamiento de barrios se realizaron mesas de trabajo, desde donde se impulsaron las encuestas, pero los vecinos y vecinas

de los barrios debieron enfrentarse a los poderes locales que insistían con desalojos. Entre algunas de estas difíciles situaciones, fue particular la del Barrio 18 de Marzo, ya que tomó relevancia nacional. En este lamentable suceso fueron detenidas tres personas, entre las que se encontraba Matías Mora, que –como dijimos– estaba realizando un operativo del Renabap en la localidad de Salvador Mazza.

Matías vivió siempre en el barrio popular Soledad, de Lomas de Zamora. Fue coordinador del relevamiento en su región y en 2017 comenzó a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, como facilitador del Renabap. Su tarea consistía en viajar a distintas regiones, con trabajadores y trabajadoras de la Anses, para realizar operativos donde se entregaba el certificado de vivienda familiar. Matías cuenta: “En junio de 2018 me tocó ir a Salta, y en Salvador Mazza decidimos ubicarnos cerca de la Municipalidad, ya que los barrios de la localidad eran varios, pero estaban alejados entre sí”.⁶ En cada operativo, el equipo facilitador de Anses enviaba notificaciones por mensaje de texto a las familias que les tocaba recibir el certificado, avisándoles cuándo y dónde se realizaría el operativo de entrega.

El 19 de junio de 2018, llegaron a Salvador Mazza, estacionaron la camioneta de la Anses frente a la Municipalidad y avisaron a cientos de vecinos y vecinas de los barrios populares que su certificado estaba disponible. En ese momento, las familias del Barrio 18 de Marzo se encontraban enfrentando un desalojo, pero al recibir la notificación supieron que podían recurrir a los facilitadores y facilitadoras de Renabap. Matías relata:

Era el primer día del operativo, estábamos acomodando todo y se acercan un grupo de vecinas al camioncito preguntando por el chico Renabap, que era yo. Me empiezan a contar que eran del Barrio 18 de Marzo y habían comenzado un desalojo. Estaban desesperadas, claro, porque estaban tirando abajo sus casas, entonces nos fuimos para allá.

El Barrio 18 de Marzo había sido creado dos años antes, luego de una toma de ochenta familias en tierras que pertenecían al intendente de Salvador Mazza. El desalojo, que comenzó el martes 19 de junio, se realizó sin ningún tipo de orden judicial; a los vecinos y vecinas solo les llegó una notificación policial el mismo día. La policía se presen-

⁶ Entrevista a Matías Mora, 2022.

tó esa mañana y destruyó las casas con topadoras o incendiándolas. Frente a esta situación, Matías se presentó como trabajador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y consultó si se había cumplido el protocolo:

Era obvio que no, no había orden judicial, no había autoridades de Niñez, ni ambulancia, ni sala de resguardo, o sea no había ninguna asistencia por parte del Estado a esas familias. Era un día común, los chicos tendrían que haber estado en la escuela, y el operativo había comenzado a las 5 de la mañana.

Coincidencia o no, mientras desalojaban el Barrio 18 de Marzo, las comisiones de la Cámara de Diputados se encontraban debatiendo la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial. Tan solo un mes después de lo sucedido en Salvador Mazza, la Cámara Baja daba media sanción a la ley que prohibía los desalojos en los barrios populares por cuatro años. Lo cierto es que el terreno en disputa se encontraba muy cerca de la frontera y era propiedad del intendente de la localidad.⁷

En su momento, la primera intervención de Matías logró dilatar el proceso y concedió más tiempo para que los vecinos se organizaran. En una asamblea decidieron realizar una olla popular al día siguiente y convocar a otros movimientos de la zona. Mientras, desde el Renabap se iniciaron diálogos institucionales, con la provincia y la intendencia, para intentar detener la avanzada policial. El 20 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, el Barrio 18 de Marzo se dispuso a resistir el desalojo con la ayuda de los trabajadores del Renabap.

El día anterior, Matías había recibido amenazas de que podría ser detenido y el hecho se concretó al mediodía, cuando comenzaban a armar la olla popular planificada. También fue detenido otro militante del Movimiento Evita, que se encontraba acompañando la jornada, y un joven del barrio, que fue liberado rápidamente. El desalojo y la detención de los militantes, uno de ellos trabajador del Estado, suscitó una rápida reacción a nivel nacional y las organizaciones sociales se

⁷ En 2021, el intendente Rubén Méndez fue acusado de enriquecimiento ilícito a partir de negocios de contrabando, junto con otras once personas y funcionarios municipales. Posteriormente, fue destituido de su cargo y la provincia de Salta ordenó la intervención del Municipio de Salvador Mazza. Actualmente, el exintendente se encuentra imputado en la causa, que está cerca de ser elevada a juicio.

movilizaron en Salta y en Capital Federal reclamando su liberación y el cese del desalojo.

Matías afirma:

Éramos el Estado peleando contra el mismo Estado... o sea, como un Estado que quiere estar presente y que tiene la fuerza de las organizaciones, con una política que intenta transformar lo que usualmente sucede. El Renabap es una institución que busca ponerse del lado de los vecinos, por eso actuamos como actuamos. Yo, como trabajador del Renabap, pero también como militante del Movimiento Evita, y también como alguien que tiene una historia similar, porque mi barrio tuvo cuatro desalojos, a mi papá le tiraron la casa abajo y conozco de primera mano lo que se siente.

A pesar de la presión de la militancia y del propio Estado, el Barrio 18 de Marzo fue desalojado el Día de la Bandera en 2018.

Durante un tiempo, los vecinos y vecinas acamparon en lugares aledaños, hasta que encontraron una oportunidad para volver a ingresar e ir reconstruyendo sus hogares. En la actualidad, el Barrio 18 de Marzo se encuentra en el Renabap y está amparado por la ley de barrios populares, por lo que no puede ser desalojado. Según el registro, en el barrio hoy viven más de 200 familias.



En la Argentina hay nueve barrios populares que se llaman Gauchito Gil. En nuestro país, el culto a este santo pagano es característico de las clases populares. La historia registra que el gauchito, llamado Antonio Mamerto Gil Nuñez, nació en 1847 en Mercedes, Corrientes, y fue reclutado para la Guerra de la Triple Alianza. Según la leyenda, Ñandeyara, el dios guaraní, se le apareció en los sueños y le dijo: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”. A partir de ese momento, desertó de la milicia y se convirtió en un símbolo para los humildes. Finalmente, fue capturado y asesinado, pero antes de morir afirmó: “Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente”. Desde entonces, el culto por el Gauchito Gil creció y cada 8 de enero miles de seguidores conmemoran la fecha de su fallecimiento.

En Corrientes encontramos uno de los barrios populares que lo homenajean en su nombre. El Barrio Gauchito Gil de esta provincia se encuentra en Monte Caseros, nació en la década del 2000 y está habitado por 88 familias. No cuenta con servicios básicos y está en una situación de inseguridad dominial.



El Barrio Rodolfo Ricciardelli es el barrio popular más grande de la Argentina, con 15.400 familias aproximadamente. Está ubicado en Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue fundado en la década de 1980. El nombre del barrio homenajea al cura Rodolfo Ricciardelli, quien tuvo una importante militancia por la dignidad del hábitat de los sectores populares y fue uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Más conocido como la villa 1-11-14, en 1978 el barrio resistió los feroces y masivos desalojos que la dictadura argentina impuso como política para los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires. Los vecinos y vecinas, entre quienes se encontraba el padre Ricciardelli, se enfrentaron a las topadoras y evitaron que destruyeran gran parte del barrio.

La antigua denominación 1-11-14 se remonta a la década de 1950, momento en el que los barrios más humildes de Ciudad de Buenos Aires fueron censados y designados con números, siendo estos tres los correspondientes a asentamientos cercanos que terminaron por fusionarse en un único conglomerado. En el 2019, la legislatura porteña reconoció el pedido de los vecinos del barrio y tomó el nombre Ricciardelli, homenajeando la historia del enfrentamiento a las topadoras.